

MEMORANDO DE PROPUESTA

PAÍS: COSTA RICA

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Facilitación de la inversión privada en infraestructura
NUMERO DEL PROYECTO:	TC-93-07-34-0
ORGANISMO EJECUTOR:	Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM)
MONTO DEL PROYECTO:	US\$1.550.000
FACILIDAD DEL FOMIN:	Cooperación Técnica (Facilidad I)
OBJETIVO:	Respaldar la creación del marco jurídico, institucional y reglamentario adecuado para las inversiones del sector privado en infraestructura.
DESCRIPCIÓN:	<p>La propuesta del proyecto consiste en la utilización de los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) para financiar: a) un programa de fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Electricidad - Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (SNE/ARESEP) a fin de permitirle cumplir con su función reguladora, facilitar la inversión del sector privado y proteger a los consumidores. El programa comprenderá: i) la formulación de la estrategia institucional y la preparación de la reglamentación del SNE; ii) la puesta en práctica de una nueva estructura orgánica; iii) la aplicación de nuevas metodologías para la fijación de precios; iv) el establecimiento de medidas de control de calidad de los servicios regulados; v) el establecimiento del sistema de audiencias; vi) la aplicación del plan estratégico en materia de sistemas de información, y vii) la creación de una unidad del medio ambiente que se encargaría de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de los organismos regulados; y b) un programa destinado a identificar los obstáculos legales existentes para la inversión privada en proyectos de energía, telecomunicaciones, suministro de agua potable y alcantarillado, transporte y riego, así como a respaldar</p>

al gobierno en materia de puesta en práctica de las reformas jurídicas necesarias para eliminar los obstáculos identificados.

**CLASIFICACIÓN
AMBIENTAL:**

Clasificado en la Categoría II por el Comité del Medio Ambiente.

MODALIDAD:

Donación.

**EQUIPO DE
PROYECTO:**

Jorge Lamas (OP2/OD4); Eduardo Villaseñor (PRA/AGR); Jacques Pepin (PRA/TCR); Francisco Marcondes (PRA/SUD); Marcelo Antinori (PRE/MIF); Laura Profeta (LEG), y Ligia Castro (FCR).

I. ELEGIBILIDAD DEL PAÍS

- 1.1 El 3 de diciembre de 1993, el Comité de Donantes declaró que Costa Rica es elegible para recibir todas las modalidades de financiamiento que prevé el Fondo Multilateral de Inversiones.

II. EL PROYECTO

Antecedentes

- 2.1 En los diez últimos años, Costa Rica ha aplicado un programa integral de reforma económica, y si bien aún quedan esferas por mejorar, las reformas han sido notablemente profundas. Ellas han contribuido a que en el país se registre un gran aumento de las exportaciones y un crecimiento económico sostenido mucho mayor que el de sus naciones vecinas; disminuya la onerosa carga de la deuda y se mantengan, e incluso superen, los mejores indicadores sociales de América Latina. Por ejemplo, entre 1983 y 1993, el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica fue en promedio del 4,7%, el más alto de América Central y uno de los más altos de América Latina; en 1992 fue del orden del 7,3% y en 1993 del 6,3%.
- 2.2 Durante el mismo período, el aumento de las exportaciones creció a un promedio anual de cerca del 10%. Las exportaciones de productos no tradicionales registraron un aumento extraordinario, llegando a constituir casi el 60% de las exportaciones de mercancías en 1993, lo que permitió que el país fuera menos dependiente que antes de la producción de café y bananas. Gracias al aumento de los ingresos por concepto de turismo, la balanza de servicios registró un saldo positivo en 1988 (después de haber registrado déficit durante más de 25 años) y, con posterioridad, se amplió todos los años hasta 1993.
- 2.3 El volumen de la deuda externa en 1992 fue casi el mismo que en 1983. Durante este lapso, disminuyó del 122% al 70% como proporción del PIB. Asimismo, el coeficiente del servicio de la deuda bajó del 60% al 14%. En 1993, la inflación se redujo al 9%, tasa muy inferior a la meta del 12% que se había propuesto y que representa una gran mejora respecto de la tasa de inflación del 17% registrada en 1992. En el sector público no financiero se registró un pequeño superávit en 1992 y los datos preliminares indican que probablemente se haya registrado otro de la misma proporción en 1993. Sin embargo, las pérdidas del Banco Central siguen siendo un problema.

- 2.4 Se han hecho avances sustanciales en materia de mejoramiento de las políticas comerciales. La libertad comercial mucho mayor observada en América Central ha sido una razón de peso para el aumento de las exportaciones. El arancel máximo aplicable a las importaciones de la mayoría de los productos se ha reducido al 20% (se prevé que las excepciones aplicables a las prendas de vestuario y calzado se eliminen paulatinamente este año) y se ha puesto fin a casi todas las barreras no arancelarias. Asimismo, en marzo de 1992, las autoridades dejaron sin efecto los controles de cambios.
- 2.5 En los diez últimos años, Costa Rica ha adoptado medidas importantes para mejorar las condiciones de la inversión privada (en general, la Constitución protege este tipo de inversión). La inversión privada se duplicó con creces entre 1982 (que fue un año de crisis económica) y 1992 y, durante el mismo período, aumentó su proporción en el PIB de menos del 10% a más del 15% (proporción similar a la que tenía antes de la crisis económica de los primeros años de la década de 1980). La balanza de pagos revela que, en el mismo lapso, la inversión extranjera directa aumentó de US\$26,5 millones en 1982 (año de un nivel muy bajo de inversiones, ya que en 1980, la inversión directa había sido de US\$48,1 millones) a US\$220 millones en 1992.
- 2.6 Salvo dos, se han privatizado las más de 40 empresas que pertenecían a la sociedad más grande de inversiones del sector público (CODESA), y la Asamblea Legislativa autorizó la enajenación de las dos que quedaban a principios de este año. Asimismo, el gobierno ha autorizado la participación del sector privado en ámbitos que antes estaban reservados exclusivamente al sector público en virtud de la Ley General de Concesiones de Servicios Públicos. Sin embargo, los bancos más grandes del país siguen siendo de propiedad estatal.
- 2.7 A fin de ayudar al gobierno a lograr su objetivo de estimular una mayor participación del sector privado en la economía, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó, en marzo de 1993, un préstamo sectorial de inversión (Préstamo 742/OC-CR) destinado a movilizar el interés del sector privado y aumentar las inversiones, la producción, las exportaciones y el crecimiento económico. Las medidas de política que prevé esta operación abordan cuestiones relativas al sistema financiero, como mercados de capitales, cambios, liberalización de las inversiones y mejoramiento de la situación económica, promoción del sector privado y recursos humanos.
- 2.8 Este préstamo está aún pendiente de ratificación por la Asamblea Legislativa; sin embargo, las autoridades han avanzado en el diseño y la aplicación de las reformas propuestas. Si bien, en lo que respecta a las reformas del sistema financiero, se han hecho progresos, todavía no se han aplicado medidas básicas, como la reforma de los bancos comerciales de propiedad estatal y la necesidad de suficiencia de capital de las instituciones

financieras. Asimismo, ya entraron en vigencia los convenios por los cuales el país se ha adherido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). Sin embargo, es preciso poner en práctica planes de acción relativos a los derechos de propiedad industrial e intelectual, al sector de telecomunicaciones, a la protección del medio ambiente y al régimen de concesiones.

- 2.9 Además de las medidas mencionadas, el gobierno se propone aplicar otras medidas tendientes a aumentar la participación del sector privado en la economía. Entre estas medidas que se aplicarán se encuentra la creación de una atmósfera propicia para la inversión del sector privado en proyectos de infraestructura. El sector privado no está efectuando este tipo de inversiones debido a las restricciones legales vigentes. Con arreglo a este objetivo, la Asamblea Legislativa aprobó, en 1993, la Ley General de Concesiones de Servicios Públicos (No. 7329), por la que se autoriza la concesión, a empresas privadas, de obras públicas, que actualmente son de responsabilidad exclusiva del sector público. Lo que falta es elaborar un plan de acción para poner en marcha este mecanismo. El Banco también está colaborando con el gobierno para preparar el proyecto de ley que tiene por objeto liberalizar las restricciones impuestas a las inversiones privadas en el sector de energía.
- 2.10 Además, como medida importante para proteger a los consumidores y mejorar las condiciones para la inversión privada en infraestructura, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley por el que se otorga autonomía y se faculta al Servicio Nacional de Electricidad, organismo regulador de las empresas de servicios públicos, a cumplir con su función fiscalizadora.

Objetivos

- 2.11 El Gobierno de Costa Rica ha solicitado la asistencia del FOMIN, a través de la Facilidad de Cooperación Técnica, para un programa de doce meses destinado a fortalecer institucionalmente al Servicio Nacional de Electricidad - Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (SNE/ARESEP), a fin de que pueda cumplir con eficiencia su función reguladora, y a identificar y eliminar los obstáculos legales que dificultan la inversión privada en infraestructura.

Actividades

- 2.12 El diseño del programa comprende todas las actividades necesarias para una ejecución adecuada, las que se agrupan en dos subprogramas (en el Anexo I se presenta un resumen de las actividades que se llevarán a cabo y los logros que se prevé alcanzar con cada uno de los subprogramas):

Subprograma I Fortalecimiento institucional del SNE/ARESEP

Subprograma II Identificación y eliminación de los obstáculos legales para la inversión privada en infraestructura

A. Subprograma I Fortalecimiento institucional del SNE/ARESEP

Marco de referencia

- 2.13 Considerando que la estructura del mercado de algunos servicios públicos tiene características monopólicas, resulta importante reglamentar dichos mercados a fin de proteger los intereses de los consumidores, garantizar la calidad de los servicios y velar por el uso más eficiente posible de los recursos. En Costa Rica, los servicios públicos son regulados por el Servicio Nacional de Electricidad (SNE), creado en 1941, que tiene por mandato (Ley No. 258) fijar tarifas y normas de calidad para los servicios de electricidad, teléfonos, agua potable y alcantarillado.
- 2.14 Originalmente, el gobierno creó el SNE con el fin de que controlara el funcionamiento de las empresas de suministro de electricidad, la calidad de sus servicios y las tarifas que podían cobrar. Con los años, se agregaron al SNE otras funciones, como la administración de los recursos hídricos (el otorgamiento de concesiones para el uso del agua), la reglamentación de las telecomunicaciones, la aprobación de tarifas para el servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, la determinación del precio de los hidrocarburos y el margen de utilidad del transporte y la comercialización de hidrocarburos, y la fijación de los derechos de riego.
- 2.15 Con arreglo a la Ley General de Concesiones de Servicios Públicos (Ley No. 7329), que tiene por objeto promover una mayor participación de la inversión privada en el suministro de servicios públicos, el SNE sigue siendo responsable de la fijación de tarifas para los servicios de telecomunicaciones, transporte, abastecimiento de agua y energía y alcantarillado, y se le agrega la función de revisar los precios y cargos de otros servicios que también se prestan en virtud de acuerdos de concesión.
- 2.16 No obstante, la asignación de funciones fiscalizadoras al SNE no estuvo acompañada de una revisión integral de su estructura jurídica e institucional. En años anteriores, las medidas adoptadas por el SNE en materia de modificación de las tarifas correspondientes al suministro de electricidad, agua potable y alcantarillado se basaban estrictamente en el costo histórico de las empresas de servicios públicos responsables de esos servicios. No se han tomado en cuenta las consideraciones relacionadas con la eficiencia económica. Además, las tarifas no consideraban los aspectos relativos al control de calidad, ni la protección de los recursos ecológicos y naturales. Pese a que la institución siempre

ha sido responsable del control de la calidad de los servicios regulados, no ha contado con la capacidad técnica necesaria para establecer normas de calidad y vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones fiscalizadas. El Poder Ejecutivo tampoco ha concedido al SNE la autonomía necesaria para desarrollar sus funciones. Es así que, por ejemplo, en el pasado, el gobierno ha demorado la aplicación de aumentos aprobados de tarifas de abastecimiento de agua y otros servicios como manera de controlar la inflación, en detrimento de los resultados financieros y de las operaciones de las empresas de servicios públicos.

- 2.17 Admitiendo que la adopción de un marco legislativo moderno y un SNE dinámico y autónomo es un paso importante para mejorar las condiciones de la inversión del sector privado en infraestructura, garantizar el uso eficiente de los recursos y proteger a los consumidores, el gobierno ha sometido a consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que contempla cambios fundamentales en la manera de reglamentar la prestación de los servicios públicos y que amplía el campo de acción del organismo regulador. Dicho proyecto propone la transformación del SNE en una "Autoridad Reguladora de Servicios Públicos" (ARESEP), define claramente sus funciones como organismo regulador y le otorga la autonomía necesaria para cumplirlas. Con arreglo a la nueva legislación, el organismo sería responsable de regular, supervisar, fijar tarifas y normas de calidad y precios, y otorgar concesiones en los siguientes ámbitos: electricidad, telecomunicaciones, abastecimiento de agua potable y alcantarillado, riego y transporte de hidrocarburos, público y de carga. De acuerdo con la nueva legislación, los procedimientos para fijar las tarifas también comprenderán un nuevo mecanismo para las audiencias públicas, a fin de brindar un ámbito para la expresión de la opinión pública y de que el proceso sea más transparente. Se prevé que las reformas jurídicas e institucionales del SNE envíen una señal clara a los inversionistas privados, que promuevan la competencia entre ellos y estimulen su participación en la prestación de servicios públicos.
- 2.18 Los retos que la nueva legislación plantea al SNE exigen el fortalecimiento técnico de la institución, a fin de que ésta se prepare para desarrollar eficiente y eficazmente su nueva función reguladora, y proporcionar de esa manera al sector privado la estructura necesaria para que éste intensifique su papel de inversionista en infraestructura. Debe destacarse que, en virtud de la nueva legislación, el SNE debe fijar las tarifas conforme a los mecanismos más eficientes para cada servicio público y fiscalizar la calidad de los servicios; sin embargo, el SNE actualmente no está en condiciones de cumplir su función reguladora. En consecuencia, aunque se demore la aprobación de la nueva legislación que establecerá el nuevo organismo regulador, es preciso proceder de inmediato al fortalecimiento institucional del SNE a fin de dotarlo de capacidad para cumplir con las funciones que le corresponden con arreglo a la legislación vigente.

Objetivo específico

- 2.19 El objetivo específico del subprograma consiste en dotar al SNE de la capacidad técnica e institucional que le permita cumplir con la función reguladora definida en la legislación actual y preparar a la institución para desarrollar la nueva función, más amplia, que se encuentra a consideración de la Asamblea Legislativa. Los logros previstos del proyecto son: i) diseño de la estrategia institucional y elaboración de la reglamentación necesaria para la aplicación de la legislación por la que se cree el nuevo organismo regulador; ii) puesta en práctica de la nueva estructura orgánica; iii) formulación y aplicación de nuevas metodologías de fijación de precios; iv) establecimiento de medidas de control de calidad, incluso de orden ecológico, de los servicios regulados; v) promulgación del sistema de audiencias; vi) aplicación de un plan estratégico en materia de sistemas de información, y vii) creación de una unidad del medio ambiente con el propósito de fiscalizar el cumplimiento de las leyes relativas al medio ambiente y otros requisitos que deben cumplir los organismos regulados.

Actividades comprendidas en el subprograma

- 2.20 A fin de cumplir con el objetivo propuesto, los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones deben utilizarse a los siguientes efectos:
- (i) contratación de especialistas (a nivel internacional y nacional), a fin de que formulen una estrategia institucional para el SNE y preparen las políticas y reglamentaciones pertinentes. Este componente permitirá que el SNE cuente con una estrategia y una dirección operacional modernas, transparentes y eficientes, que permitan a la institución promover el aumento de la inversión privada en las empresas de servicios públicos y mejorar la calidad de los servicios, así como fomentar el uso eficiente de los recursos;
 - (ii) contratación de especialistas con la misión de elaborar la estructura orgánica adecuada y prestar su asistencia para ponerla en práctica. La nueva estructura permitirá a la institución cumplir eficientemente su función de organismo regulador;
 - (iii) contratación de especialistas extranjeros con experiencia en materia de fijación de tarifas, a fin de que asesoren al SNE en la aplicación de metodologías modernas de regulación económica de tarifas (como costos marginales y variaciones a largo plazo, incluidas las reservas para la adquisición de energía generada por compañías independientes y la adopción de técnicas de competencia en ciertos segmentos del mercado o entre las empresas que se presenten a

licitación para la concesión de servicios). Estos especialistas también proporcionarán capacitación en el empleo al personal del SNE en cuanto al uso de metodologías de fijación de precios que darían a la economía señales para la asignación eficiente de sus recursos;

- (iv) contratación de especialistas extranjeros con experiencia en control de calidad, que ayuden al SNE a definir, preparar y aplicar normas de control de calidad de los servicios regulados, y proporcionen capacitación en el empleo, a fin de que la institución pueda cumplir con su mandato de controlar la calidad de los servicios;
- (v) contratación de especialistas extranjeros con el propósito de ayudar al SNE a formular y poner en práctica los nuevos procedimientos de audiencias;
- (vi) contratación de especialistas nacionales que se ocupen de organizar una unidad del medio ambiente en el ámbito del SNE, que se encargaría de fiscalizar el cumplimiento de la legislación relativa al medio ambiente y los recursos naturales por parte de las instituciones reguladas, y
- (vii) contratación de un consultor nacional, que se encargue de formular y aplicar el plan estratégico para los sistemas de información y la compra de los equipos y programas de computación que necesite el SNE para fijar las nuevas tarifas.

2.21 Se han elaborado términos de referencia preliminares con respecto a casi todas las actividades, pero los definitivos serán preparados por el MIRENEM e incluidos en un plan de acción que será examinado por el Banco.

B. Subprograma II Identificación y eliminación de los obstáculos legales para la inversión privada en infraestructura

Marco de referencia

2.22 En años anteriores, en la estrategia para el desarrollo del país, se hacía hincapié en la participación del gobierno en todos los ámbitos de la economía, y la producción se orientaba al mercado interno. Como parte de la estrategia, se crearon barreras con el fin de proteger a los productores nacionales y a las empresas públicas frente a la competencia aunque, por otro lado, el programa de reforma económica en marcha admite la importancia de la participación del sector privado en la economía como manera de lograr un crecimiento económico sostenible.

- 2.23 La aprobación, por la Asamblea Legislativa en 1993, de la Ley General de Concesiones de Servicios Públicos (Ley No. 7329), que autoriza la concesión de obras públicas, actualmente de responsabilidad exclusiva del sector público, a empresas privadas y prevé el fortalecimiento jurídico e institucional del SNE/ARESEP, constituye una medida importante y necesaria para captar inversiones privadas para obras de infraestructura. Sin embargo, todavía quedan muchas restricciones legales a la participación del sector privado en estos sectores, de modo que la Ley General de Concesiones de Servicios Públicos y el fortalecimiento del SNE/ARESEP no constituyen por sí solos medidas suficientes para captar el interés del sector privado.
- 2.24 A fin de superar las restricciones existentes, el gobierno, en coordinación con el Banco, está aplicando y planeando reformas complementarias destinadas a atraer la participación de los inversores privados en proyectos de infraestructura, a saber:
- (i) Electricidad. El Banco colabora con las autoridades para acelerar la incorporación de la inversión privada en la generación de energía eléctrica hasta el 15% de la capacidad instalada, y posteriormente cooperar para eliminar, si es necesario: i) el límite de 20 megavattios para centrales hidroeléctricas privadas y en el volumen total de generación de energía eléctrica por parte de empresas privadas y el 15% cumulativo de la capacidad instalada; ii) un máximo de participación extranjera en las empresas nacionales de generación eléctrica del orden de 35%, y iii) limitación de la generación de energía eléctrica por el sector privado a la proveniente de fuentes renovables. Otra cuestión que debe abordarse a fin de promover la participación del sector privado es el distinto trato que se da a las empresas públicas y privadas en lo que respecta al pago de impuestos. Las empresas privadas de generación de energía actualmente deben pagar impuestos, en cambio, la empresa estatal (Instituto Costarricense de Electricidad - ICE) no tiene que hacerlo, en tanto que ambos tipos de empresas deben aplicar las mismas tarifas por los servicios.
 - (ii) Telecomunicaciones. El Banco respalda la separación administrativa y financiera de las ramas de energía eléctrica y telecomunicaciones del ICE, en un esfuerzo por mejorar la eficiencia de las operaciones y elevar el volumen de las inversiones. Esta reforma podría propiciar una participación más amplia del sector privado en telecomunicaciones en el futuro; empero, para ello será preciso introducir modificaciones importantes en la legislación, ya que el marco jurídico vigente reserva para el ICE el monopolio en materia de telecomunicaciones.

- (iii) Agua potable, alcantarillado y transporte: Los esfuerzos del gobierno se concentran en la promulgación de un reglamento claro y transparente de la ley de concesiones de obras públicas, que permita la adjudicación al sector privado de concesiones para la ejecución de obras que son de competencia del sector público. Asimismo, esta medida se complementa con la planificación y gestión más efectivas de la actividad del sector público y la racionalización de las instituciones públicas, con el fin de crear una estructura más atractiva para la inversión privada.
- (iv) Riego: El gobierno planea organizar un sistema transparente y conciso para agilizar la aprobación de concesiones y el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos. Varios organismos públicos son responsables de los recursos hídricos, con lo que se crean niveles no coordinados de control administrativo, que a su vez imparten mucha burocracia al sistema actual, en el que varias instituciones deben aprobar el uso de los recursos hídricos del país por parte del sector privado.

Objetivo específico

- 2.25 El objetivo específico del subprograma es respaldar al gobierno en las tareas de identificar los obstáculos legales que restringen la participación del sector privado en obras de infraestructura; preparar proyectos de reformas legales que eliminen los obstáculos identificados, y concitar apoyo para la aplicación de las reformas acordadas. Con el subprograma se pretende lograr lo siguiente: a) preparación de una lista completa de obstáculos que restringen la inversión del sector privado en los sectores de electricidad, suministro de agua potable y alcantarillado, riego, transporte y telecomunicaciones; b) preparación de proyectos de leyes y reglamentaciones necesarias que eliminen los obstáculos identificados, y c) organización y puesta en marcha de un órgano especial que se encargue de fiscalizar la administración y la protección de los recursos hídricos.

Actividades comprendidas en el subprograma

- 2.26 A fin de lograr los objetivos propuestos, los recursos del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) se utilizarían para financiar las siguientes actividades:
- (i) contratación de consultores extranjeros con experiencia en materia del marco jurídico y reglamentario del sector de energía, a fin de que examinen la legislación vigente y asesoren al gobierno en la preparación de las modificaciones necesarias;

- (ii) contratación de consultores extranjeros con experiencia en materia del marco jurídico y reglamentario del sector de telecomunicaciones, a fin de que examinen la legislación vigente y ayuden al gobierno a preparar proyectos de leyes que faciliten la participación del sector privado;
 - (iii) contratación de consultores extranjeros con experiencia en materia de marcos jurídicos y reglamentarios para el suministro de agua potable y alcantarillado, a fin de que examinen la legislación vigente y ayuden al gobierno a elaborar proyectos de leyes que faciliten la participación del sector privado;
 - (iv) contratación de consultores extranjeros con experiencia en materia del marco jurídico y reglamentario del sector de transporte, a fin de que examinen la legislación vigente y asesoren al gobierno en la preparación de las modificaciones necesarias;
 - (v) contratación de consultores extranjeros con experiencia en materia del marco jurídico y reglamentario del riego, con la misión de examinar la leyes vigentes y asesorar al gobierno en la elaboración de proyectos de leyes que faciliten la participación del sector privado;
 - (vi) contratación de asesores jurídicos nacionales con experiencia en la legislación nacional aplicable a la prestación de servicios públicos, a fin de que colaboren con los consultores extranjeros, y
 - (vii) contratación de consultores extranjeros con experiencia en materia de gestión y protección de los recursos hídricos, a fin de que formulen un nuevo marco institucional para la reglamentación de los recursos hídricos y ayuden al gobierno en su aplicación.
- 2.27 Se han preparado términos de referencia preliminares con respecto a casi todas las actividades, pero los definitivos serán redactados por el SNE y el MIRENEM e incluidos en un plan de acción que será examinado por el Banco.

Costo y financiamiento

- 2.28 A continuación se consignan los costos previstos de cada uno de los componentes que recibirán financiamiento no reembolsable del FOMIN. El MIRENEM suministrará las oficinas y el personal de apoyo que necesiten los consultores.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (en dólares de los Estados Unidos)

I. Fortalecimiento institucional del SNE

1.	Formulación de la estrategia y preparación de reglamentos		90.000
a.	Especialistas extranjeros (seis meses/profesional)		
2.	Estructura orgánica		72.000
a.	Especialistas extranjeros (cuatro meses/profesional)	60.000	
b.	Especialistas nacionales (tres meses/profesional)	12.000	
3.	Tarifas		540.000
a.	Agua potable y electricidad Especialistas extranjeros (seis meses/profesional)	90.000	
b.	Recursos hídricos Especialistas extranjeros (seis meses/profesional)	90.000	
c.	Riego Especialistas extranjeros (ocho meses/profesional)	120.000	
d.	Transporte Especialistas extranjeros (ocho meses/profesional)	120.000	
e.	Telecomunicaciones Especialistas extranjeros (ocho meses/profesional)	120.000	
4.	Control de calidad		165.000
a.	Especialistas extranjeros (once meses/profesional)	165.000	
5.	Procedimiento de audiencias		60.000
a.	Especialistas extranjeros (cuatro meses/profesional)		
6.	Unidad del medio ambiente		30.000

7.	Sistemas de información	193.000
a.	Especialistas nacionales (doce meses/profesional)	48.000
b.	Equipos y programas de computación	145.000
8.	Coordinador del programa (nacional)	50.000
a.	Especialistas nacionales (doce meses/profesional)	
	Subprograma I - Total	1.200.000
II.	Ajuste del marco jurídico para la inversión del sector privado en infraestructura	
1.	Consultores en materia de energía	60.000
2.	Consultores en materia de telecomunicaciones	80.000
3.	Consultores en materia de suministro de agua potable y alcantarillado	30.000
4.	Consultores en materia de transporte	30.000
5.	Consultores en materia de riego	30.000
6.	Asesores jurídicos nacionales	90.000
7.	Consultores en materia de administración de recursos hídricos	30.000
	Subprograma II - Total	350.000
	TOTAL DEL PROGRAMA	1.550.000

Organización y ejecución

- 2.29 Organismo ejecutor. La ejecución de la operación propuesta estará a cargo de una unidad técnica especial, que se creará como parte del MIRENEM, a fin de que se encargue de la ejecución del componente de fortalecimiento institucional del programa (Subprograma I). La identificación de los obstáculos legales para la inversión del sector privado (Subprograma II) también estará a cargo de esta unidad. Los recursos del programa servirán para financiar el costo de un consultor que actuaría como coordinador para asegurar la ejecución eficiente del programa y estaría a cargo de la contratación de consultores para el programa.
- 2.30 Desembolsos. Los fondos de la operación de cooperación técnica se desembolsarán de acuerdo con los procedimientos del Banco. Sin embargo, como condición previa al primer desembolso, el MIRENEM presentará un plan de acción en el que se expondrán en detalle el plan de ejecución de las actividades del programa, así como los

términos de referencia definitivos de los consultores. En el Anexo II figura el programa provisional de desembolsos.

- 2.31 Como es imposible conocer por anticipado y con absoluta precisión todo lo que se necesitará para la ejecución del programa, el respaldo del FOMIN comprendería un mecanismo destinado a flexibilizar la asignación de los recursos del FOMIN. Se hará un examen de mitad de período y el MIRENEM preparará informes en los que, en caso de ser necesario, se propondrá la introducción de modificaciones en cualquiera de los subprogramas y se recomendará a la Oficina del FOMIN la correspondiente nueva asignación de recursos entre las partidas del presupuesto.

Seguimiento

- 2.32 Para el seguimiento del programa será necesario elaborar dos informes, el primero de ellos a los seis meses de la ejecución del programa, y el informe final al cabo de un período de doce meses. El informe que debe presentar el MIRENEM comprenderá el examen de los primeros seis meses del programa, así como recomendaciones para mejorar su ejecución y también incluiría los obstáculos identificados, las modificaciones legales propuestas y un programa para la ejecución de dichas reformas. Asimismo, el informe final del MIRENEM deberá comprender recomendaciones relativas a la consolidación del proceso de fortalecimiento institucional y las enmiendas introducidas y el calendario para la ejecución de las modificaciones pendientes.

Viabilidad y riesgos

- 2.33 El programa fue preparado con el propósito de comprender todas las actividades necesarias para alcanzar el objetivo propuesto, incorporando en la ejecución del programa la flexibilidad necesaria para asegurar su éxito. Además, es importante señalar que los principales partidos políticos apoyan la promulgación de las leyes necesarias para transformar al SNE en la ARESEP. Asimismo, los empleados de la institución han participado activamente en el diseño de la propuesta de fortalecimiento. La eliminación de obstáculos legales está dentro del marco de actividades del programa de reforma económica que están aplicando las autoridades. Estos factores aumentan la posibilidad de que el programa se ejecute en forma satisfactoria.
- 2.34 Sin embargo, el logro de los objetivos del proyecto aún depende del apoyo político que se requerirá para que la Asamblea Legislativa apruebe las modificaciones legales. La elección presidencial tuvo lugar a principios de febrero de 1994 y el nuevo gobierno asumirá el poder en mayo del mismo año. Asimismo, la apertura de iniciativas del sector privado en infraestructura podría encontrar la oposición de las empresas del sector público que prevalecen en ese ámbito. Estas cuestiones deben considerarse como riesgos, pese al

mejor empeño puesto por los encargados de la ejecución del programa.

- 2.35 A fin de reducir al mínimo estos riesgos, se han ideado medidas para que las instituciones fiscalizadas tengan mayor participación en todo el proceso de reformas y, considerando que el análisis necesario para identificar los obstáculos legales a la inversión privada en infraestructura y la elaboración de propuestas de modificaciones legales estarían terminados después de las elecciones, el equipo de proyecto debería examinar, con el nuevo gobierno, la oportunidad y la estructura de la ejecución del programa.

III. CUMPLIMIENTO CON LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ELEGIBILIDAD DEL PROYECTO

Criterios generales

- 3.1 El programa de reformas aplicado por el Gobierno de Costa Rica y el financiamiento del FOMIN para facilitar la inversión del sector privado en obras de infraestructura se ajustan estrictamente a la finalidad general del Fondo Multilateral de Inversiones, que consiste en incrementar la inversión privada y contribuir al desarrollo del sector privado.

Criterios de la Facilidad para establecer la elegibilidad del proyecto

- 3.2 La propuesta también se ajusta plenamente a los criterios exigidos para el otorgamiento de recursos no reembolsables en el marco de la Facilidad de Cooperación Técnica, estipulados en la Sección 2 del Artículo 3 del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones que establece, entre otros, el criterio de que se harán donaciones a los gobiernos para financiar los servicios de asesoramiento necesarios para poner en práctica las reformas del marco jurídico y normativo para la inversión y para crear o fortalecer organismos reguladores.

IV. CONSISTENCIA CON EL PROGRAMA DEL BANCO EN EL PAÍS

- 4.1 En la estrategia del Banco para Costa Rica se hace hincapié, entre otras cosas, en la consolidación de la liberalización del comercio y la mayor participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. Este proceso también entrañaría la definición de nuevas esferas para la participación del sector privado, especialmente en materia de obras y servicios públicos; esto permitiría centrar la inversión pública en la financiación de

proyectos sociales o de infraestructura que no pudieran financiarse con recursos del sector privado. A fin de captar la inversión del sector privado en obras de infraestructura, es necesario fortalecer el marco reglamentario para establecer normas claras e identificar cualquier otro obstáculo jurídico que pueda restringir la participación del sector privado en los servicios públicos. La operación propuesta contribuirá al logro de esta meta, fortaleciendo la capacidad técnica del SNE, y a la fijación de tarifas y la identificación de los obstáculos jurídicos que siguen impidiendo una mayor participación del sector privado en este ámbito.

V. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DEL FOMIN

Modalidad de financiamiento

- 5.1 Se prevé que el proyecto sea financiado mediante una donación. La elegibilidad de Costa Rica para recibir financiamientos no reembolsables fue aprobada por el Comité de Donantes el 3 de diciembre de 1993, y no existen restricciones para la asignación de recursos del Fondo Multilateral de Inversiones a Costa Rica.

VI. EVALUACIÓN

- 6.1 Los resultados de esta operación de cooperación técnica serán evaluados por el equipo de proyecto sobre la base del grado de cumplimiento de los objetivos específicos, y la evaluación respectiva se presentará en el Informe de Terminación de Proyecto.

VII. PLAN DE ACCIÓN

- 7.1 Será necesario disponer de los recursos humanos siguientes para completar las actividades para la aprobación de la operación y la ejecución del proyecto:

Descripción	Hasta la fecha		Necesidades futuras	
	BID	FOMIN	BID	FOMIN
I. Personal (Equipo de Proyecto)				
1. FOMIN Coordinador/Asistente		2 semanas		2 semanas
2. OPS/OD4	2 semanas		2 semanas	
3. FCR	2 semanas		8 semanas	
4. PRA/ENE	2 semanas		2 semanas	
5. PRA/TRC	1 semana			
6. PRA/SUD	1 semana		2 semanas	
7. LEG/OPR	1 semana		2 semanas	
TOTAL	9 semanas	2 semanas	16 semanas	2 semanas

ANEXO I

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES – FACILIDAD I – COSTA RICA: FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA		
Objetivo general del proyecto Facilitación de la inversión del sector privado en infraestructura		
Objetivo específico del proyecto Promover el fortalecimiento institucional del SNE/ARESEP, y brindar apoyo al gobierno para la identificación de las modificaciones que es preciso introducir en el marco jurídico y reglamentario para facilitar la inversión del sector privado		
Fortalecimiento institucional del SNE/ARESEP	Actividades que deben cumplirse	Logros previstos
Formulación de la estrategia y preparación de la reglamentación	Contratación de consultores por periodos breves, a fin de que preparen la estrategia y los proyectos de normas de política necesarias	Formulación de la estrategia dentro de un período de cuatro meses y promulgación de las normas y políticas en el de diez meses
Formulación y aplicación de una nueva estructura orgánica	Contratación, por periodos breves, de consultores con experiencia en la formulación de estructuras orgánicas de entidades reguladoras	Puesta en práctica de la nueva estructura operacional dentro de los diez meses de formulada
Formulación y aplicación de una nueva política de fijación de precios	Contratación, por periodos breves, de consultores extranjeros con experiencia en materia de fijación de tarifas	Aplicación de la política de fijación de precios dentro de un período de diez meses
Establecimiento de normas de control de calidad y criterios de supervisión	Contratación, por periodos breves, de consultores extranjeros con experiencia en los aspectos técnicos del control de calidad	Establecimiento del sistema de control de calidad dentro de un período de diez meses
Establecimiento de un sistema de audiencias	Contratación, por periodos breves, de consultores extranjeros con experiencia en materia de procedimientos de audiencias	Aplicación efectiva del procedimiento de audiencias a los cuatro meses de aprobada la nueva legislación
Diseño y establecimiento de un sistema de información gerencial	Contratación de servicios de consultores para el diseño de los sistemas de información	Diseño de los sistemas de información dentro de un período de seis meses
	Ayuda financiera para la adquisición de equipos y programas de computación y la capacitación del personal	Compra de los equipos dentro de un período de diez meses
Creación de una unidad del medio ambiente	Contratación, por periodos breves, de consultores con experiencia en materia de normas sobre medio ambiente y recursos naturales	Creación de la unidad del medio ambiente dentro de un período de ocho meses

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES – FACILIDAD I – COSTA RICA: FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA		
Objetivo general del proyecto Facilitación de la inversión del sector privado en infraestructura		
Objetivo específico del proyecto Promover el fortalecimiento institucional del SNE/ARESEP, y brindar apoyo al gobierno para la identificación de las modificaciones que es preciso introducir en el marco jurídico y reglamentario para facilitar la inversión del sector privado		
Marco jurídico para la inversión del sector privado	Actividades que deben cumplirse	Logros previstos
Electricidad	Contratación de consultores por períodos breves, a fin de que examinen la legislación y preparen las modificaciones necesarias	Preparación de los proyectos de legislación dentro de un período de ocho meses
Telecomunicaciones	Contratación de consultores por períodos breves, a fin de que examinen la legislación y preparen las modificaciones necesarias	Preparación de los proyectos de legislación dentro de un período de diez meses
Agua potable y alcantarillado	Contratación de consultores por períodos breves, a fin de que examinen la legislación y preparen las modificaciones necesarias	Preparación de los proyectos de legislación dentro de un período de diez meses
Riego	Contratación de consultores por períodos breves, a fin de que examinen la legislación y preparen las modificaciones necesarias	Preparación de los proyectos de legislación dentro de un período de diez meses
Transporte	Contratación de consultores por períodos breves, a fin de que examinen la legislación y preparen las modificaciones necesarias	Preparación de los proyectos de legislación dentro de un período de ocho meses

ANEXO II

PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL USO DE LOS RECURSOS DEL FOMIN (en miles de dólares de los Estados Unidos)					
Trimestres					
Subprogramas	1ª	2ª	3ª	4ª	Total
I	300,00	410,00	290,00	200,00	1.200,00
II	90,00	90,00	90,00	80,00	350,00
TOTAL	390,00	500,00	380,00	280,00	1.550,00

PROYECTO DE RESOLUCION

COSTA RICA. COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PARA FACILITAR LA
INVERSION PRIVADA EN LA INFRAESTRUCTURA

El Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Fondo Multilateral de Inversiones, proceda a formalizar los acuerdos necesarios con la República de Costa Rica y a adoptar las medidas pertinentes para la ejecución del memorándum de proyecto a que se refiere el documento MIF/AT- sobre un programa de cooperación técnica para facilitar la inversión privada en la infraestructura.
2. Destinar para fines de esta resolución hasta la suma de US\$1.550.000, o su equivalente, con cargo a los recursos de la Facilidad de Cooperación Técnica del Fondo Multilateral de Inversiones.
3. Establecer que la suma anterior sea otorgada con carácter no reembolsable.